

**ANOTACIONES A PROPÓSITO DE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA
DETENCIÓN POLICIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL¹**

***NOTES ON THE LIMITS OF POLICE DETENTION IN THE JURISPRUDENCE OF
THE PERUVIAN CONSTITUTIONAL COURT***

Jorge Isaac Torres Manrique

Consultor jurídico. Abogado por la UCSM (Arequipa).
Doctorados en Derecho y Administración, y Maestrías en
Derecho Empresarial y Derecho Penal, por la UNFV (Lima).
Docente Principal en WorldWide Legal Consulting de la
California Silicon Valley School of the Law, SFO (USA).
Consejero Editorial de la Revista American Journal of Science
and Technology (USA). Revisor de la Revista Forensic Research
& Criminology International Journal (USA). Miembro de la Red
de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (España).
Miembro del Cuerpo Editorial de Evaluadores de la Revista
Universitaria Jurídica Juris del Centro Universitario Toledo
Araçatuba –UNITOLEDO (Brasil). Articulista e investigador del
Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación
Jurídica Latin-Iuris (Ecuador). Columnista de la Asociación
Civil El-terno.com (Lima). Distinguished Lawyer of Perú, for
Law Integration Integração Jurídica (Brasil). Miembro del
Comité Científico Internacional del Instituto Jurídico
Internacional de Torino (Italia). Miembro extranjero de la
Asociación Argentina de Justicia Constitucional (Argentina).

¹ Artigo recebido em 04/09/2018, sob dispensa de revisão.

Miembro, par académico evaluador, corresponsal e investigador externo adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco). Par académico evaluador de la Revista Misión Jurídica, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia). Par académico evaluador del libro colectivo internacional sobre Ciberterrorismo (México). Investigador Externo de la Universidad Global (Honduras). Miembro asociado de E-Justicia Latinoamérica (Argentina). Autor de libros en derecho constitucional y procesal constitucional, publicados en impreso en: Colombia, Paraguay, Chile y Perú. Ex Coordinador General, coautor, traductor, prologador y presentador de siete libros jurídicos colectivos internacionales. Autor de más de medio centenar de artículos y ensayos en materia jurídica y management, en publicaciones físicas y virtuales, en importantes medios de más de veinte países. Ponente nacional e internacional. Lima, Peru. E-mail: kimblellmen@outlook.com.

RESUMEN: En la presente entrega, el autor analiza y desarrolla los diversos alcances respecto de lo señalado por el Tribunal Constitucional peruano, en relación de la figura jurídica denominada: plazo de detención policial. Ello, en el marco de lo que comporta lo positivizado por el Estado Constitucional de derecho y Derecho Convencional, vigentes. Así determina, hasta qué punto dicho tribunal viene o no, observando las imprescindibles garantías y salvaguardas que el respectivo derecho fundamental abraza, cual es, la libertad personal.

PALABRAS CLAVE: Detención Policial. Plazo de Detención Policial. Exceso de Detención Policial. Derecho fundamental a la Libertad Personal.

ABSTRACT: In the present installment, the author analyzes and develops the various scopes with respect to the points made by the Peruvian Constitutional Court, in relation to the legal

figure called: term of police detention. This, within the framework of what involves the positivized by the Constitutional State of Law and Conventional Law, in force. Thus it determines, to what extent said court comes or not, observing the essential guarantees and safeguards that the respective fundamental right embraces, such as, personal freedom.

KEYWORDS: Police Detention Police Detention Term. Excess Police Detention. Fundamental Right to Personal Freedom.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN.

Es de considerar en primer término, que el derecho fundamental a la libertad (luego del derecho a la vida), se constituye en uno de los más preciados, importantes como trascendentales.

En ese orden de pensamiento, la justificación para abordar la presente entrega, tiene por basamento, el poder determinar hasta qué punto el Tribunal Constitucional peruano (en adelante, TC), viene o no, observando las imprescindibles garantías y salvaguardas que dicho derecho fundamental abraza, basilarmente.

Ello, a la luz de lo señalado por el TC, relacionado al plazo de detención policial, en el marco de lo que comporta el Estado Constitucional de derecho y Derecho Convencional, imperantes.

II. ACERCA DEL PLAZO MÁXIMO DE DETENCIÓN POLICIAL.

En principio, es de considerar que el plazo máximo de detención policial, tiene que ser circunscrito en los postulados del plazo razonable.

Al respecto, en principio el plazo razonable ha merecido un sinnúmero de definiciones, así CORIGLIANO² citando a ZAFARONI/ALIAGA/SLOKAR afirma: “*Desde un punto de vista dogmático un proceso penal cuya tramitación supera el plazo razonable, esto es de duración excesiva, no sólo lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente sino que también afecta a todos y cada uno de sus derechos fundamentales y sus garantías procesales reconocidas en la Constitución. Como consecuencia, si el proceso se prolonga indebidamente todas sus reglas de funcionamiento acabarán distorsionando su derecho a un juicio rápido y los principios elementales de la actuación legítima del Estado*”.

Además, el plazo razonable (proveniente del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, posteriormente acogido por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y así también, por el Tribunal Constitucional peruano), se encuentra implícitamente inmerso en el derecho al debido proceso o proceso regular.

Así también, conviene referir los criterios establecidos para determinar el desarrollo de un plazo razonable, fueron dados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y también compartidos por el sistema y tribunal señalados en el párrafo anterior, a saber: i) la complejidad del caso, ii) comportamiento del procesado, y iii) la manera en que fue llevado por las autoridades y judiciales.³

No obstante, es preciso dejar constancia que en dicha temática, el plazo estrictamente necesario se ha constituido en una salvaguarda de observancia fundamental, para el procesado

² CORIGLIANO, Mario E. *Plazo razonable y prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Derecho penal on line <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,535,0,0,1,0>. Buenos Aires, p. 01.

³ TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. *A propósito del precedente vinculante del plazo razonable de la detención judicial preventiva, STC N° 3771-2004-HC*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Derecho Penal Profesor José Hurtado Pozo http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20121108_01.pdf. Suiza, p. 02.

y el proceso. Esto es, que no se precisa que transcurra necesariamente el plazo establecido en la norma legal, sino que, si se puede atender antes del mismo, no existe motivo alguno, para esperar el último día de su vencimiento para lo propio.

III. UNA MIRADA A LO QUE DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO.-

3.1. A manera de aproximación.

En primer término y a modo de antecedente a la detención policial, tenemos el precedente vinculante del Tribunal Constitucional peruano (en adelante TC), N° 3771-2004-HC, Caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón, el mismo que versa acerca del plazo razonable de la prisión preventiva, en el que dicho Colegiado Constitucional bien pudo acoger lo solicitado por el encausado. Por otro lado, consideramos que el procesado tiene expedito su derecho de hacer valer o indemnizar ante la abusiva medida de imposición de detención judicial preventiva por exceso de tiempo, mediante el proceso llevado a la luz de la Ley N° 25659. El fundamento radica en que no es correcto supuestamente reparar un error legislativo (Ley N° 25659), con la ocurrencia de otro error, esto es, con la dación del Decreto Legislativo N° 922, al atribuir indolentemente las nefastas consecuencias al procesado —es decir, establecer el inicio del cómputo del plazo únicamente desde lo estipulado por esta última norma, desconociendo el anterior periodo en el que también estuvo detenido preventivamente por el juzgado— que injustamente purgó una cuasi condena vía la imposición de detención judicial.

Ello parece obedecer a la tímida como progresiva aparición de una cultura de detención (en el presente caso, preventiva y no del proceso) justa, así como, de la superación mayoritaria del sistema inquisitivo. La misma que enarbola banderas de no vulneración de los derechos procesales del imputado, esto es, a que principalmente sea juzgado sin dilaciones indebidas.

Consideramos, que la referida prisión preventiva justa o razonable (la que es distinta del plazo de la prisión preventiva), fluye como consecuencia de los cada vez más consolidado sistema penal garantista, influenciado por los postulados del neo constitucionalismo, derecho global y Estado constitucional de derecho. Postergando la modernidad y a la vez, propugnando y fomentando la contemporaneidad.

Por otro lado, se tiene que: *“para la suerte del proceso, el vencimiento de su plazo máximo de duración razonable debe ser visto como un impedimento procesal que evite la prolongación del enjuiciamiento, dado que, de continuar, se volvería ilegítimo a partir de ese punto en el tiempo. En el derecho procesal penal este impedimento se canaliza a través de la vía de las excepciones o artículos de previo pronunciamiento, con imputación, por analogía in bonam partem, al obstáculo procesal de la prescripción del delito. En resumen, los plazos de duración máxima razonable del proceso deben ser fijados legislativamente con carácter general y con la consecuencia jurídica de que, al cumplirse, el proceso deba cesar anticipada y definitivamente”*.⁴

En ese sentido, el Fundamento 2., de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, Exp. N° 7624-2005-PHC/TC, estatuye: *“El inciso 24 del artículo 2° de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal, el cual tiene un doble carácter. En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como atributo objetivo cumple una función institucional en la medida en que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales (Cfr. Exp. N.º 1091-2002-HC/TC), en virtud de lo cual se derivan los límites a*

⁴ PASTOR, Daniel R. *Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Revista de estudios de la justicia. http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf, Chile, 2004, p. 76.

su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros bienes o valores constitucionales. Es por ello que la determinación del plazo razonable de detención no puede tomar en consideración únicamente la presunción de inocencia y el derecho a la libertad del procesado, sino que la constitucionalidad de la prisión provisional encierra el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, como una manifestación negativa del derecho a la libertad personal”.

Por otro lado, deviene en importante acotar que el plazo razonable de la detención judicial preventiva es un derecho implícito de la libertad personal y también una garantía del principio de la presunción de inocencia. En ese sentido, como bien indicamos precedentemente el Tribunal Constitucional del Perú influenciado por la jurisprudencia internacional ha establecido los criterios para determinar el plazo razonable de duración del proceso, y en ese orden de ideas, ha hecho lo mismo en el caso de la detención preventiva. Con relación a la duración razonable de detención no puede tomarse en consideración únicamente la presunción de inocencia y el derecho a la libertad del procesado sino que la constitucionalidad de la prisión provisional encierra el deber estatal de perseguir eficazmente el delito (STC recaída en el Exp. 7694-2005.PHC/TC, f.j.2).⁵

Sin embargo, es sumamente preocupante atestiguar que en no pocas oportunidades, la vigente interpretación del plazo razonable se continúe desconociendo y sea penosamente postergada por el máximo plazo que registra el establecido en la ley.

3.2. En lo relacionado a la detención policial.

El TC en el Acap. 3.3.6., del Fund. 3.3., del Exp. N° 04630-2013-PHC-TC, acerca de las consideraciones sobre el derecho fundamental a la libertad personal y privación de libertad, señala: “(...)este Tribunal advierte que la detención policial del favorecido se dio cuando este agredió físicamente a su hija María Marciana Maqui Salinas (la agarró por la espalda y la

⁵ AMADO RIVADENEYRA, Alex. *El derecho al plazo razonable como contenido implícito del derecho al debido proceso: desarrollo jurisprudencial a nivel internacional y nacional*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Revista Internauta de Práctica Jurídica: http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num27/2Derecho%20al%20plazo%20razonable.pdf, Valencia, pp. 56.

arrastró a efectos de que reingrese al recinto donde se encontraba contra su voluntad) y agredió y amenazó con arrojar piedras a los efectivos policiales intervinientes. En otras palabras, la detención policial que se cuestiona en la demanda no se dio en mérito a los hechos sucedidos el día 5 de abril de 2013, materia de la aludida denuncia de parte del día 9 de abril de 2013 (9:30am), sino en atención a la conducta desplegada por el beneficiario que se describe en el Acta de Intervención Policial S/N — 2013, de fecha 9 de abril de 2013 (10:50am). Ella a su vez evidencia la situación delictiva de flagrancia del delito que —en su momento— fue apreciada por el efectivo policial demandado como constitutivo del delito de violencia familiar”.

Seguidamente, en el Acap. 3.3.7., del Fund. 3.3., del mismo expediente, prescribe: “(...)este Tribunal considera pertinente indicar que no es tarea que competa al juez constitucional el determinar el delito o delitos que el favorecido don José Fermín Maqui Salinas habría realizado en la fecha de los hechos descritos en la citada acta de intervención policial. No obstante, es su atribución el verificar si la detención realizada por el efectivo policial emplazado se efectuó en la situación de la flagrancia que establece la Constitución, lo cual sí se evidencia del caso de autos, pues, se aprecia la concurrencia de los presupuestos de la inmediatez temporal y la inmediatez personal de la flagrancia descritos en el fundamento 3.3.3, *supra*. Por consiguiente, corresponde que la presente demanda sea desestimada”.

En la presente jurisprudencia del Exp. N° 04630-2013-PHC-TC, apreciamos que el TC advierte la concurrencia de los presupuestos de la inmediatez temporal y la inmediatez personal de la flagrancia, para la detención policial y por ello desestima la acción de *habeas corpus* interpuesta.

Por otro lado, tenemos el Fund. 17., del Exp. N° 01878-2013-PHC/TC, que señala: “(...)la responsabilidad legal generada por la detención policial arbitraria del requisitoriado, que ha desbordado el plazo máximo establecido por la Constitución, no puede ser eximida bajo el argumento de que se no se efectuó el traslado del capturado porque el Poder Judicial

no ha remitido el dinero para el traslado; puesto que, la Policía Nacional del Perú cuenta con el mandato constitucional expreso de poner al detenido a disposición del órgano judicial correspondiente en el término de tiempo establecido (artículo 2, inciso 24, literal f, de la Constitución)”.

Resolución que continúa en su Fund. 18.: “(...)este Tribunal rechaza el argumento de descargo del efectivo policial Chamorro Orihuela, quien refiere que el "beneficiario ha manifestado su voluntad de quedarse en las instalaciones de la DEINCRI -AJ -La Merced hasta el día 1 O de setiembre de 2012." Y es que el deber de la Policía Nacional es poner al requisitoriado a disposición del órgano judicial requirente dentro del plazo establecido, no admitiéndose actuación u omisión en contrario”.

Y finaliza con su Fund. 19.: “(...)este Tribunal concluye que el jefe de la DEINCRI - AJ – La Merced, mayor PNP Iván Rodolfo Rea Morales, y el encargado de la Policía Judicial de la localidad, técnico PNP Mauro Chamorro Orihuela, han vulnerado el derecho a la libertad personal de don Flaviano Alhuay Puca, al no haberlo puesto a disposición del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo dentro de las 48 horas de la ejecución de su detención. Ello pese a haber transcurrido más de tres días desde que se recabó el oficio judicial que confirmó la vigencia del mandato de requisitoria (su fecha 6 de setiembre de 2012), superando el plazo máximo de la detención policial que establece el ordenamiento constitucional”.

Es de destacar de dicha resolución, del Exp. N° 01878-2013-PHC/TC, la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad, en la evidencia de la vulneración del plazo máximo de detención policial. Lo que condujo a dicho Tribunal a declarar fundada la demanda de *habeas corpus* interpuesta.

Además, es de considerar el Fund. 12., del Precedente Vinculante, Exp. N° 06423-2007-PHC/TC, que respecto de las reglas vinculantes para la tutela del derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo máximo de la

detención, señala: “*reglas deben ser interpretadas en la perspectiva de optimizar una mejor protección del derecho a la libertad personal, en la medida que no solo es un derecho fundamental reconocido, sino que además es un valor superior del ordenamiento jurídico y presupuesto de otros derechos fundamentales*”.

La primera: “a) Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. Y es que, aun sí la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de ésta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas”.

Y la segunda: “Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe un control de los plazos de la detención tanto concurrente

como posterior, dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el e o, las medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos de la detención debe ser efectuado tanto por el Representante del Ministerio Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien complementarios”.

Amerita apostrofar los aportes del precedente vinculante contenido en el Exp. N° 06423-2007-PHC/TC, puesto que establece en primer lugar: que resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de ésta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona. Y en segundo término, que el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.).

IV. DEBERES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS RESPECTO DEL PLAZO MÁXIMO DE LA DETENCIÓN POLICIAL.

En el presente acápite, abordamos la capital importancia que cobra lo correspondiente al accionar o papel que tienen que asumir las demás entidades estatales, integrantes del sistema de administración de justicia.

Así, en primer lugar tenemos al Ministerio Público. Así, es de verse el Art. 1.-, del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, que en relación a su función establece: “(...)es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos(...)”.

A continuación, el Art. 4.-, de dicha norma legal, en lo relativo a la deficiencia de la Ley y aplicación de principios Generales del Derecho. Iniciativa Legislativa, dispone: “En los casos de deficiencia de la Legislación Nacional, el Ministerio Público tendrá en consideración los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano, en el ejercicio de sus atribuciones(...)”.

Seguidamente, el Art. 9.-, de la referida Ley, acerca de la intervención del Ministerio Público en etapa policial establece: “(...)conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución Política, vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial(...)”.

En segundo término, figura el Poder Judicial. Y tenemos que el Art. 9.-, del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sobre la facultad sancionadora del Juez, juridiza: “Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y en general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus mandatos. Esta facultad comprende también a los abogados”.

En tercer lugar, tenemos al Tribunal Constitucional, cuyo Art. 2.-, de su Ley Orgánica, Ley N° 28301, respecto de su competencia, establece: “(...)es competente para conocer de los procesos que contempla el artículo 202 de la Constitución(...)”. Y el Art. 202°.-, de la Constitución Política, en relación a lo que le corresponde al Tribunal Constitucional, dispone:

“1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”.

En un cuarto momento, es de mencionar a la Defensoría del Pueblo. Así, el Art. 1.-, de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, respecto a los principios generales, preconiza: *“A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos”.*

En ese sentido, se aprecia que ante la eventual vulneración del plazo de detención policial, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, como la Defensoría del Pueblo, se encuentran habilitados por la ley para intervenir.

A propósito, cabe dejar constancia que el Ministerio Público lo hará en virtud de la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos vigilando e interviniendo en la investigación del delito desde la etapa policial.

A su turno, el juez se encuentra facultado para sancionar a todas las personas, ya sean, naturales o jurídicas (morales), ya sean, particulares o estatales, en caso se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas.

Y por su parte, la Defensoría del Pueblo lo hará en su calidad de defensor los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, esto es, en el presente caso, de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

V. TUTELA ANTE EL EXCESO DE LA DETENCIÓN POLICIAL.-

Imposible desconocer la gran importancia que comporta el precisar, a qué entidades acudir y mediante qué tipo de acciones legales, en caso de ser víctima de una detención policial que exceda el plazo establecido por la ley.

En principio, tenemos que se puede interponer ante una denuncia ante el Ministerio Público, a efectos de hacer valer los derechos fundamentales: a la libertad personal, contra el abuso del derecho, entre otros.

Luego, el *habeas corpus* se constituye en la acción legal a efectos de acudir al Poder Judicial, con dichos fines. Así lo establece el Art. 7.-, del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sobre la tutela jurisdiccional y debido proceso, enseña: “*En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito*”.

A continuación, también el *habeas corpus* se constituye en la acción legal a efectos de acudir al Tribunal Constitucional, con dichos fines. Dicha deberá ser interpuesta en última instancia.

Como decíamos, “*(...)el TC únicamente conoce en última instancia de aquellos procesos constitucionales de amparo, cumplimiento, hábeas data y hábeas corpus desestimatorios y que hayan sido objeto de impugnación a través del recurso extraordinario de agravio constitucional. No olvidemos sin embargo, que existen excepciones a la regla, respecto a la procedencia del recurso de agravio constitucional (RAC) contra sentencias desestimatorias. Estamos hablando de aquellos casos excepcionales en los que la resolución impugnada no es*

*desestimatoria, pero al modular sus efectos, se encuentra justificada su procedencia, por ejemplo: cuando se ha producido la sustracción de la materia por irreparabilidad o cese de la vulneración del derecho; cuando los efectos de la sentencia estimatoria resulten inapropiados para la tutela efectiva del derecho vulnerado; cuando se han deducido excepciones y éstas han sido indebidamente resueltas, imposibilitando conocer el tema de fondo; cuando se hace necesario ordenar el pago de pretensiones accesorias vinculadas a la protección eficaz del derecho constitucional discutido; y, cuando se presentan vicios procesal en el proceso que han afectado directamente en la decisión. Igualmente procede el RAC contra sentencias estimatorias en aquellos supuestos donde se pretende otorgar tutela efectiva en ejecución de sentencia, por ejemplo: el RAC a favor del cumplimiento de las sentencias de Tribunal Constitucional, a favor de la ejecución de las sentencias del Poder Judicial, a favor del orden constitucional vinculado a procesos penales sobre tráfico ilícito, de drogas y/o lavado de activos, el RAC ante pedidos de represión de actos homogéneos, y frente al incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional”.*⁶

Finalmente, ante la inobservancia de dichos derechos fundamentales por parte de cualquiera de las mencionadas entidades estatales, corresponde acudir, vía queja y de habeas corpus, a la Defensoría del Pueblo. Ello, con la finalidad de que la misma a través de acción inmediata se constituya y se comuniquen con las entidades correspondientes (de manera indistinta o a todas), esto es, a la policía, al Ministerio Público o el Poder Judicial.

Así, el Inc. 1.-, del Art. 9.-, de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, respecto a las facultades que cuenta el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, dispone: “*Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo defectuoso, irregular, moroso, abusivo o*

⁶ ACUÑA CHAVEZ, Araceli. *Funciones y competencias del tribunal constitucional peruano*. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5437/ACUNA_CHAVEZ_ARACELI_FUNCIONES_COMPETENCIAS.pdf?sequence=1. Lima, 2014, p. 120.

excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”. Además, el Inc. 2.-, del Art. 9.-, de dicha norma, señala: “(...) *Asimismo, está capacitado o facultado para intervenir en los procesos de Hábeas Corpus, para coadyuvar a la defensa del perjudicado*”.

VI. DETENCIÓN POLICIAL SEGÚN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.-

Tenemos que dejar constancia que, en relación al plazo razonable de la prisión preventiva o del proceso, fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que sentó las bases del término plazo razonable, atribuyéndole al mismo una novísima naturaleza de atemporalidad no prevista abstractamente en la ley (denominada por la doctrina por el “no plazo”), sino más bien, por el de la indicación que el juzgador evalúe la duración del caso para estimar, a través de diversos criterios, si es que efectivamente se cumplió o no con el plazo razonable.

Además, cabe señalar que en el caso que lo referido no haya sido probadamente observado- es decir, que el plazo haya devenido en irrazonable-, queda solicitar la compensación correspondiente, a efectos de reparar la vulneración del derecho fundamental invocado.

Entonces, tenemos que la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, fue desarrollada inicialmente por la Corte IDH, vía el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia (Sentencia de fecha 27/11/08). Así, se tiene que dicha Corte agregó un criterio —el cuarto para nuestro TC— para el análisis para la determinación del plazo razonable en el proceso penal, a los ya establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.⁷

⁷ TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. *Breves disquisiciones atinentes a los criterios de análisis para la determinación del plazo razonable en el proceso penal peruano*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de

Respecto de este tema, es decir, del cuarto criterio agregado, la mencionada resolución, el Alto Tribunal interamericano, en su Fundamento 155., establece: “La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”.

Y es que, si bien es cierto que los delitos cometidos por organizaciones criminales, constituyen una preocupación de primer orden en el Estado peruano (como parte basilar de la creciente como imparable inseguridad ciudadana), ello no habilita en extremo alguno a que en procura de contrarrestarlos, quede justificada plenamente la vulneración de no pocos derechos fundamentales de los detenidos.

Que no se nos malentienda, pues, nuestra posición es netamente purista desde el punto de vista de la justeza, entonces, no es meramente legal o constitucional (*ergo*, no abogamos a que las organizaciones criminales cometan delitos impunemente).

Así, incluso podríamos ir más allá. Esto es, poner sobre el tapete el tema de que si ya la detención policial por flagrancia tiene que abrazar el tiempo estrictamente necesario (plazo razonable), entonces, prolongar dicho tiempo a quince días no solo constituye un oceánico contrasentido, sino que, la vulneración de derechos fundamentales se torna mayúscula como condenable.

Además, dicha ampliación del plazo de la detención policial tampoco se condice con la titularidad de la investigación que le asiste al Ministerio Público. En ese orden de inteligencia: ¿Para qué ampliar dicho plazo en favor de la policía?

VII. ¿Y QUÉ DICEN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS?.-

En el presente punto corresponde citar el párr. 47., del Caso Gangaram Panday vs. Surinam, de la Corte IDH, el que enseña: “(...)se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.

Esta alusión al necesario respeto a los derechos fundamentales del individuo apunta principalmente al derecho a la libertad personal como elemento material o sustancial, en los términos del artículo 7.1, lo cual implica que la legislación interna debe regular este derecho de tal manera que no sea lesionado. La lesión se produce, desde esta óptica material, cuando la privación de libertad carece de justificación. La falta de razonabilidad o de proporcionalidad a la cual se refiere la sentencia consiste justamente en que la privación de libertad, aun teniendo base en la ley, no sea realmente necesaria en el caso en que fue adoptada o resulte desmesurada.⁸

Cabe precisar, que el Inc. 1, del Art. 7., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acerca del Derecho a la Libertad Personal, estatuye: “*Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales*”.

⁸ VV.AA. *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de: http://www.kas.de/wf/doc/kas_38682-1522-1-30.pdf?140922172843, Bolivia, 2014, p. 189.

Al respecto, a la luz de referida jurisprudencia, la Corte IDH es contundente al señalar que la legitimidad o justeza se impone a la mera legalidad, en tanto que lo que se afecta son derechos fundamentales. Por ello, la ampliación del plazo de detención policial en flagrancia, que juridiza la Ley N° 30558, no encuentra sustento válido en los predios de la ansiada justicia.

Por otro lado, es preciso dejar constancia que de ampliarse legislativamente el plazo de detención, se vulnera lo contenido en el Inc. 5., del Art. 7., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que en relación al derecho a la libertad personal, esto es, al derecho de toda persona detenida o retenida a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario con funciones judiciales, contempla: *“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”*.

VIII. ¿AMPLIAR DETENCIÓN POLICIAL EN FLAGRANCIA ABRAZA LA JUSTICIA?.-

En principio, resulta menester traer a colación lo prescrito por el Inc. 1., del Art. 259 del Código Procesal Penal, que respecto de la detención policial, prescribe: *“La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando:(...)”*.

En relación al presente punto, sostenemos que la flagrancia obedece a una naturaleza de inmediatez, de encontrar al autor en el escenario de los hechos (de flagrante delito) y en su defecto o por extensión, iba hasta antes de la reforma constitucional que la Ley N° 30558, esto es, hasta veinticuatro horas con posterioridad a la comisión del hecho delictivo.

Sin embargo, resulta insostenible que se haya prescrito al amparo de dicha norma legal, que la flagrancia se amplíe hasta cuarenta y ocho horas (más el término de la distancia), e incluso hasta quince días para el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales; en tanto, que la vulneración a cuanto menos un derecho fundamental resulta indefendible.

En ese orden de ideas, no hay que olvidar que el bien jurídico máspreciado de nuestro ordenamiento jurídico, después de la vida humana, es la libertad personal. En consecuencia, en orden de prelación tenemos que denunciar que la Ley N° 30558, vulnera abiertamente el segundo derecho fundamental.

IX. Y A PROPÓSITO, ANALIZAMOS LA LEY N° 30558.-

El Artículo Único de la Ley de Reforma del Literal F del Inciso 24 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30558 (publicada en fecha 09/05/17), preconiza: *“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (...)24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) f. Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades judiciales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.*

Seguidamente, procedemos a examinar las modificaciones al plazo de detención policial en flagrancia, en el marco de la Ley N° 30558. Así tenemos:

9.1. La detención solo puede extenderse por el plazo estrictamente necesario.

En relación al mismo, podemos señalar que el plazo estrictamente necesario se ha constituido en una garantía basilar para el procesado y el proceso.

Además, es preciso tener en cuenta que la desmedida duración del proceso penal no es un problema menor, el que considero ha de ser tratado por la dogmática jurídica aunque algunos autores pregonan que debe ser atendido en sus aspectos teóricos por la política criminal. Además, el derecho procesal penal debe brindar una respuesta adecuada en el marco de sus principios de funcionamiento y especialmente, para asegurar total acatamiento del principio del Estado Constitucional de Derecho en la interpretación del alcance, significado y consecuencias del derecho fundamental del imputado a ser juzgado rápidamente.⁹

Empero, es también pertinente tomar en consideración que si bien es cierto que la vulneración del plazo razonable de la detención preventiva, vulnera principalmente el derecho a la libertad personal, menoscaba a su vez, aquellos derechos que impedidos de poder ejercerse como consecuencia de la limitación de la mencionada libertad.

Además, es preciso tener en cuenta que la desmedida duración del proceso penal no es un problema menor, el que considero ha de ser tratado por la dogmática jurídica aunque algunos autores pregonan que debe ser atendido en sus aspectos teóricos por la política criminal. Además, el derecho procesal penal debe brindar una respuesta adecuada en el marco de sus principios de funcionamiento y especialmente, para asegurar total acatamiento del principio del

⁹ CORIGLIANO, Mario E. Ob. cit., p. 04.

Estado Constitucional de Derecho en la interpretación del alcance, significado y consecuencias del derecho fundamental del imputado a ser juzgado rápidamente.

Empero, es también pertinente tomar en consideración que si bien es cierto que la vulneración del plazo razonable de la detención preventiva, vulnera principalmente el derecho a la libertad personal, menoscaba a su vez, aquellos derechos que impedidos de poder ejercerse como consecuencia de la limitación de la mencionada libertad.

9.2. La detención se extiende a cuarenta y ocho horas más el término de la distancia.

Es imprescindible tomar en consideración que el incumplimiento de plazo razonable de una medida de restricción de la libertad, como lo es la detención policial, definitivamente genera un abanico de vulneraciones de derechos fundamentales del procesado.

Así, dejamos constancia que resulta imperioso supervigilar el correcto accionar de las partes en el proceso. En tal sentido, no olvidemos que todos los plazos impuestos en la ley procesal para con el imputado son fatales, y en este sentido el solo transcurso del tiempo determina la caducidad del derecho si no ha sido utilizado en el tiempo apropiado. En cambio los jueces pese a estar sujetos también a plazos ordenatorios pueden extender temporalmente - discrecionalmente- el dictado de sus resoluciones. A tenor de lo dicho es posible agregar que para que el imputado no sea tenido como negligente, que no sólo debe preservar y cumplir sus propios términos, también debe exigir que los jueces cumplan con los que procesalmente pesan sobre ellos, su incumplimiento colaborará con el desajuste procesal que se invoca.¹⁰

Empero, cuando la detención policial se extiende a cuarenta y ocho horas, más el término de la distancia, se torna excesiva como inaceptable. Ergo, entre los derechos menoscabados, como producto de la aplicación de excesiva duración de la detención policial, podemos referir:

¹⁰ CORIGLIANO, Mario E. Cit., p. 15.

i) la libertad individual, ii) legalidad, iii) presunción de inocencia, iv) defensa, v) preclusión, entre otros.

9.3. El plazo de la detención puede llegar a quince días, también para el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

En el presente acápite, en razón al excesivo plazo ampliatorio de detención estipulado, amerita traer a colación la resolución del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), Exp. N° 295-2012-PHC/TC—Caso Aristóteles Román Arce— que fue expedida en fecha 14/05/15, la que constituye doctrina jurisprudencial vinculante y versa acerca del establecimiento del cómputo del plazo razonable en el proceso penal.

Así, se tiene que a través de la mencionada sentencia de fondo, el TC ha dispuesto que el cómputo del plazo razonable en el proceso penal debe iniciarse desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende la investigación policial o la fiscal, y ya no desde la aprehensión del procesado.

Asimismo, el TC aclaró que ante la afectación del plazo razonable, la reacción por parte de la justicia constitucional no puede ser la exclusión del procesado, el sobreseimiento o el archivo definitivo del proceso penal. A propósito, cabe dejar constancia que como punto resaltante destaca, que vía la resolución del Exp. N° 295- 2012-PHC/TC, el mismo ha introducido un nuevo criterio para el abordamiento de la mencionada empresa. Esto es: la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

X. CONCLUSIONES.-

De lo desarrollado se colige, que los límites a la detención policial que se le plantea al Tribunal Constitucional peruano, corren por cuenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los mismos que el mencionado Tribunal no los viene observando.

A la luz de lo desarrollado, colegimos que el Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, son competentes ante la configuración del excesivo plazo razonable de detención policial. A diferencia del Defensor del Pueblo —que además de ejercer su rol supervisor a dichas instituciones (y a las estatales restantes), además, de las privadas que brinden servicios públicos —se encuentra facultado para interponer *habeas corpus ex officio*.

Empero, la crítica de fondo, la que más nos preocupa, es la sistemática vulneración de los derechos fundamentales no solamente de los eventualmente detenidos —i) la libertad individual o personal, ii) legalidad, iii) presunción de inocencia, iv) defensa, v) progresividad, entre otros— al amparo de la modalidad de detención policial en flagrancia en los extremos que la Ley N° 30558.

No obstante, consideramos que el desvelo y reto principal debiera ser, evitar el eventual menoscabo del plazo razonable de la detención policial en flagrancia, se aterrice con mayor razón y de manera memorable, legítima o justa, en los predios de resarcimiento y reparación del procesado. Esto último, en tanto advertimos que este procesado parece ser finalmente ser dejado de lado, olvidado, extraviado, condenado a su suerte, a la ignominia. Asegurándosele el penoso como seguro camino hacia su revictimización.

Ello ocurre, cuando el legislador desconoce de: política criminal, los principios generales del derecho, los postulados del Derecho Constitucional, lo que registra la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia. Ello además, a la luz del Estado Constitucional de Derecho, Derecho Procesal Garantista, una correcta como justa administración de justicia, Neoconstitucionalismo, Derecho Global y

sistema jurídico imperante. Entonces, termina legislando de espaldas a todo ello, incurriendo en limitaciones, yerros y vulneraciones mencionadas.

Entonces, dicha empresa se torna particular cuidado y de dimensiones mayúsculas, lo que implica la obligada como urgente respuesta jurisdiccional y legislativa en los mismos términos y extremos, bajo la naturaleza de enmienda.

Por otro lado, consideramos que las modificaciones realizadas por el Congreso de la República, presentan una singular importancia, en razón de las diversas aristas en las que influye en la temática de primer orden nacional, que es la crisis de la cada vez asfixiante criminalidad organizada, inseguridad ciudadana, rebrote de corrupción, desinstitucionalización, entre otros. Ello, en el marco de estos tiempos de nada auspiciosa coyuntura y especial trascendencia, esto es, de la cuasi aun, novedosa vigencia del nuevo código procesal penal, donde el proceso penal se vuelve más célere. Sin embargo, lo prescrito por la Ley N° 30558, representa un contrasentido a los fines de la mencionado código.

No obstante, dejamos constancia que las meras modificaciones constitucionales de ampliación del plazo de detención policial en flagrancia en los extremos que la Ley N° 30558 preconiza, largamente no aseguraría la pretensión ansiada con la misma. Siguiendo dicha indefendible como nefasta lógica, tendríamos que aceptar que para el aseguramiento del abrace de las bondades de dicha ley, sería mucho mejor ampliar los referidos plazos a cien días (igual de desacertado del agravamiento de las penas para lograr que no se delinca). Lo cual evidencia que la indicada lógica no soporta el mínimo análisis.

XI. SUGERENCIAS.-

El Tribunal Constitucional peruano, precisa de manera urgente como insoslayable, adecuar lo relacionado al plazo de detención policial, de modo acorde a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Urgente como insoslayable capacitación a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, a efectos que se encuentren debidamente imbuídos, acerca de la no vulneración del derecho fundamental al plazo razonable de detención policial y por ende, los derechos fundamentales involucrados. Ello, con la finalidad que dichos conocimientos sean puestos efectivamente en práctica.

Es más, exhortamos a la comunidad jurídica a estar en permanente vigilancia de la defensa de los principios generales del derecho y de la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, los mismos que se entiende deben guiar y ajustar la plasmación y actuación del sistema jurídico peruano. Es decir, que propugnamos la irrestricta defensa de la preeminencia de la legitimidad, por sobre la mera legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.

Por otro lado, somos de la opinión que precisamente en procura de una mejor y completa investigación, como consecuencia del plazo de detención policial en flagrancia (en los tres casos en los que se aprecia la ampliación del respectivo plazo), lo que se requiere es atender las necesidades que las particularidades que el Nuevo Código Procesal Penal comporta, esto es, dotando a los actores policiales y jurisdiccionales la logística y medios pertinentes, a efectos que el plazo de detención policial en flagrancia no deba ampliarse como lo señala el Artículo Único, de la Ley N° 30558.

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ACUÑA CHAVEZ, Araceli. *Funciones y competencias del tribunal constitucional peruano*. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5437/ACUNA_CHAVEZ_ARACELI_FUNCIONES_COMPETENCIAS.pdf?sequence=1. Lima, 2014.

AMADO RIVADENEYRA, Alex. *El derecho al plazo razonable como contenido implícito del derecho al debido proceso: desarrollo jurisprudencial a nivel internacional y nacional*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Revista Internauta de Práctica Jurídica: http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num27/2Derecho%20al%20plazo%20razonable.pdf, Valencia.

CORIGLIANO, Mario E. *Plazo razonable y prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Derecho penal on line <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,535,0,0,1,0>. Buenos Aires.

PASTOR, Daniel R. *Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Revista de estudios de la justicia. http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf, Chile, 2004.

TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. *A propósito del precedente vinculante del plazo razonable de la detención judicial preventiva, STC N° 3771-2004-HC*. En línea: Recuperado en

fecha 25/07/18 de Derecho Penal Profesor José Hurtado Pozo
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20121108_01.pdf. Suiza.

TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. *Breves disquisiciones atinentes a los criterios de análisis para la determinación del plazo razonable en el proceso penal peruano*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de Revista de Estudos jurídicos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
<https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/1591/1502>. Brasil, 2014.

VV.AA. *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. En línea: Recuperado en fecha 25/07/18 de: http://www.kas.de/wf/doc/kas_38682-1522-1-30.pdf?140922172843, Bolivia, 2014.